

# POLITICA EXTERIOR

## EL COMUNICADO MEXICANO-FRANCES

# LAS RAZONES DE LA RAZON

A primera vista, no pueden pasar por menos de sorprendentes, las últimas jugadas que ha realizado el gobierno de Estados Unidos en el marco de su estrategia diplomática para El Salvador. El jueves, durante una sesión de la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU, el representante estadounidense votó, junto con otros 20 países, a favor de una resolución —copatrocinada por México, Francia, Costa Rica y Panamá— que reconoce la necesidad de que "todas las fuerzas políticas" de El Salvador participen en la búsqueda de una solución pacífica a la crisis que afronta aquella sociedad centroamericana. Lo curioso es que ese mismo día, mientras se registraba ese hecho, el secretario de Estado, Alexander Haig, desde Washington, enviaba una felicitación al presidente de Colombia, Julio César Turbay Ayala, por su participación en la condena que lanzaron el 2 de septiembre ése y otros ocho gobiernos latinoamericanos en contra del comunicado mexicano-francés del 28 de agosto.

Pero más sorprende aún el hecho de que durante la reunión de esa subcomisión de la ONU en Ginebra, en el cuerpo del texto de la resolución aprobada también por Estados Unidos se afirma claramente que en El Salvador "no existen condiciones propicias" para llevar a cabo elecciones democráticas. No se descarte, si se quiere, la posibilidad de que el personero de Reagan ante ese organismo haya incurrido en un error. Creer tal cosa es legítimo, pero simplifica el problema.

El pronunciamiento de México y Francia, difundido como se sabe hace tres semanas, contiene la esencia del principio de no intervención que el gobierno mexicano ha mantenido en todos los actos de su política internacional. Expresar reconocimiento de representatividad "a la alianza del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y del Frente Democrático Revolucionario", para que esta coalición político-militar participe "en la instauración de los mecanismos de acercamiento y negociación necesarios para una solución política de la crisis", es a todas luces un acto que se apega con rigor al derecho internacional, puesto que no constituye intromisión alguna en los asuntos internos del gobierno salvadoreño.

### CAUSAS DE LA CRISIS

La crisis de El Salvador —que no es sino producto de la reacción organizada de los sectores populares más consecuentes a la tradicional conducta de dominación despótica que por más de medio siglo han observado la oligarquía y los militares, con el apoyo de Estados Unidos— es ya un fenómeno que, por su magnitud, va más allá de la jurisdicción específica de la junta de gobierno, porque se ha convertido en un gravísimo y doloroso in-

terrogante, cuya respuesta atañe directamente al conjunto del pueblo salvadoreño —es decir, a los que están en el poder y a las masas que lo reclaman para sí—, y es, al propio tiempo, un inexcusable caso de conciencia que involucra moralmente a la comunidad internacional.

Es evidente, y por tanto ocioso subrayarlo, que los gobiernos de México y de Francia no suministran armamento, créditos ni asesoría militar a ninguna de las dos partes protagonistas del conflicto. Más aún: la declaración mexicano-francesa en ningún momento ha descalificado al régimen salvadoreño como elemento capaz de contribuir efectivamente a la solución de esa crisis. Y por el contrario, además de mantener en el poder con todos los recursos represivos necesarios a la junta militar democristiana, Estados Unidos, en forma invariable, ha desestimado la capacidad del pueblo organizado para hallar la fórmula que resolvería el enfrentamiento.

En el plano de los hechos concretos, Estados Unidos ha organizado palmo a palmo el genocidio que están perpetrando las fuerzas armadas salvadoreñas contra la población civil que no se ha incorporado a la lucha militar. Es, asimismo, de la plena responsabilidad estadounidense la supuesta reforma agraria impulsada por la junta desde el año pasado y es, igualmente, fruto de la Casa Blanca el proyecto escandaloso de convocar a un proceso electoral que legitimaría la permanencia del actual régimen (así fuese con nuevas figuras) en el poder.

### LA REPUTACION DE LOS IMPUGNADORES

A los gobiernos de Colombia y Venezuela les tomó cinco días de apresurados contactos la preparación de la condena al documento mexicano-francés, la cual fue hecha pública el 2 de septiembre en Caracas con el apoyo de otros siete regímenes, de pésima reputación (con la excepción del que encabeza Antonio Guzmán en la República Dominicana): Argentina, Bolivia, Chile, Guatemala, Honduras y Paraguay. Todos ellos respaldados por ejércitos usurpadores del poder civil.

Los organizadores de esta apresurada respuesta, sin embargo, tuvieron el buen cuidado de elegir con cierto tino a los convocantes: los gobiernos de Luis Herrera Campins y de Julio César Turbay Ayala, ambos elegidos por el voto popular, detalle muy importante, puesto que confería alguna aparente legitimidad democrática a la maniobra. La adhesión de aquellos que respondieron al llamado era previsible. Argentina lo hizo en atención a los cada vez más estrechos lazos que ha establecido con los socialcristianos gobernantes en Venezuela, y no vaciló en ha-

cerse acompañar por sus aliados incondicionales, la dictadura de Alfredo Stroessner y la deteriorada camarilla golpista boliviana. No debe dudarse, por lo demás, que estos tres gorilatos, así como el sangriento de Pinochet, acogieron la propuesta colombiano-venezolana con tanto entusiasmo, porque ésta les ofreció la posibilidad de reforzar con hechos su perenne fraseología anticomunista, para proyectarla una vez más hacia sus respectivas bases de apoyo.

En el área centroamericana, los gobiernos también vandálicos de Honduras y Guatemala se sumaron de inmediato y con ahínco a la condena contra México y Francia, de modo harto explicable. Honduras, como siervo fiel a los dictados de la Casa Blanca, que pretende conferirle un papel de gran importancia estratégica para sus planes en la región. Y Guatemala, porque ello le permitía, de nueva cuenta, expresar su enorme desagrado a la actitud de México respecto de Belice, sin pasar por alto que tanto el gobierno de Lucas como el de Policarpo Paz García, alimentan vivo interés por ver sometidas a las masas salvadoreñas, por la ubicación inmediata de aquel conflicto en sus fronteras, pero también por el desarrollo (aunque en Honduras sea en muchísimo menor grado) de los procesos internos de rebelión popular que amenazan con destruir su dominación.

Las razones que animaron al gobierno dominicano a incorporarse a esta periquera son, como se dice, muy otras, pero de algún modo también son las mismas. El presidente Antonio Guzmán representa a la tendencia más conservadora del Partido Revolucionario Dominicano, aun cuando, en el terreno de los negocios, mantenga contradicciones con la oligarquía crecida a la sombra de Trujillo. A lo largo de su periodo gubernamental, Guzmán, este desafortunado gestor de la capa emergente de la burguesía de esa media isla, se ha conducido en repetidas veces sin el consenso de los sectores democráticos del PRD, encabezados por la figura de José Francisco Peña Gómez, miembro distinguido de la Internacional Socialista, con la que tan buenas relaciones guarda el PRI, e integrante de la dirección de la Coppel, cuyo presidente, no se olvide, es un priísta. De manera que en este caso, nada pudo hacer Peña Gómez por frenar un ataque tan torpe contra dos gobiernos amigos y dos partidos filiales del PRD, como lo son el PS francés y, discretamente, el PRI.

### SOMOZA YA NO ESTA EN EL BUNKER

Si bien, al advertir la reacción de esos nueve países, hubo quienes pensaron en un sonoro fracaso de la diplomacia mexicano-francesa —sensación que se agudizaría con la adhesión de Brasil a la conde-

na—, pronto cambiaría la correlación de fuerzas. Venezuela recibe directamente la reprobación de la democracia cristiana costarricense y del gobierno de Carazo que suscribe la postura de México y Francia. Simultáneamente, Cuba y Nicaragua emiten declaraciones de apoyo al comunicado, como también Panamá, Noruega, Chipre, Perú, Ecuador y diversas organizaciones políticas —entre éstas la Coppel—, de manera que la condena de los nueve, que luego con Brasil serían diez, desata reacciones favorables al pueblo salvadoreño con mayor intensidad que el comunicado mismo. En este contexto, se da incluso la absurda reclamación de la junta salvadoreña al gobierno de Managua, bajo la delirante invocación de la solidaridad regional y tal parece que, al protestar así, el gobierno de Napoleón Duarte hubiese olvidado que ya no está Somoza en el bunker.

Esta corriente favorable al pronunciamiento de México y Francia, propicia que sea tan bien recibida, en la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU, la iniciativa de México, Francia, Costa Rica y Panamá, que recomienda la necesidad de que todas las fuerzas políticas salvadoreñas participen en la solución pacífica de la crisis. Y aquí hay una cuestión que debe observarse: la resolución de la ONU merece la aprobación de Estados Unidos, toda vez que, al suscribirla, la Casa Blanca pretende argumentar su imparcialidad en el conflicto. Es decir, el gobierno de Reagan votó a favor de la paz para el pueblo salvadoreño —junto con los otros 20 países— como si no tuviese nada que ver en el asunto, como si no fuese el principal causante de la muerte de miles de trabajadores y campesinos, como si estuviese al margen de ese genocidio que horroriza a todos los pueblos de la tierra. La administración estadounidense, con este gesto, intentó demostrar su apego a las normas del derecho internacional y al principio de no intervención —al que López Portillo calificó en días pasados como expresión de "responsabilidad internacional"— y le importaba tanto hacerlo, que no se detuvo a considerar que por esa vía estaba invalidando la farsa electoral que el propio Pentágono se esfuerza por montar el año próximo.

No optó Washington, en este caso, por una posición más congruente con su política de expansión, como lo hicieron en esa oportunidad los representantes de Argentina, el único país miembro de la Subcomisión que votó en contra. Y más aún, no vio la conveniencia de aplazar o cancelar la felicitación a Turbay Ayala —quien la necesita con urgencia para encerrar las presiones militares que atosigan a su debilitado mandato— así fuese para guardar, con mejor celo, las apariencias del caso.

JAIMÉ AVILES